

nunciada por el Juez de Distrito de Tabasco en 4 de Julio del presente año que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protego al C. Luis M. Salazar, contra la providencia del C. Magistrado de la 1ª Sala del Tribunal Superior del Estado, que ha dado origen á este recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándolo testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre ... de 1874.—*Enrique Lande.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan por el C. Lic. Manuel Castillo Manzanilla, contra los CC. que funcionan como Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, por haberle impuesto una multa por infraccion de la ley de papel sellado de 14 de Febrero de 1856.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El informe emitido por el ciudadano que lleva la voz de la Junta que, con el título de Tribunal Superior de Justicia, ejerce el acto reclamado por el C. Manuel Castillo Manzanilla en el presente juicio de amparo, viene á poner el sello de justificacion á los

TOMO VI.—PARTE II.

fundamentos en que el infrascrito se apoyó al pedir que se suspendiera desde luego ese acto, pues en dicho documento se reconoce que los magistrados, conforme á la Constitucion particular del Estado, deben proceder del sufragio popular y que la Legislatura es la que debe hacer el escrutinio de la eleccion, y expedir el decreto declaratorio de su resultado. Luego sino ha sido ese cuerpo legislativo el que ha practicado tales actos, no pueden llamarse magistrados los que emanan de ellos. Ocioso sería sin embargo, tratar de probar el grado de una evidencia mas perfecta de la que hasta aquí se tiene sobre ese punto, que los cinco individuos que se quedaron funcionando como Congreso en el palacio del Estado, bajo la proteccion inmediata de las fuerzas federales, constituyen realmente el Poder legislativo que segun las leyes locales, se compone de catorce diputados; pues separados nueve de estos del ejercicio de sus funciones legítimas por el golpe de mano que tanta celebridad ha llegado á conquistar entre nosotros por las funestas consecuencias que está produciendo, nunca, desde entonces, ha podido esa minoria de los cinco escogidos formar cuerpo en que se encarna autoridad alguna. Las descepciones amarguísimas que se sufren en el resbaladísimo campo de la política habian hecho aceptar como cosa corriente; pero hipérbolica, la paradoja de que en ese mundo falaz de la política "tres y dos no son cinco;" pero á nadie, sino á los ciegos por el espíritu de su intere particular, más que de algun partido; podrá ocurrírsele sostener seriamente que "nueve son menos que cinco." En este punto, pues, consiste la dificultad; que pruebe la Junta, ciudadanos titulados magistrados, que los cinco diputados protegidos por la fuerza de las armas, con insulto de la tan decantada é hipócritamente invocada soberanía del Estado, constituyen el cuerpo legislativo del mismo, y entonces el fiscal será el primero en respetar sus determinaciones, y en reconocer como verdade-

ras autoridades á las que nos digan que son las elegidas del pueblo, aunque el Fiscal abrigue el íntimo convencimiento de que se calumnia al pueblo con atribuirle tal elección; pero mientras se deje en pie la sensata creencia universal de que nueve son más que cinco, mientras de que estos últimos directa ó indirectamente intenten derivar y deriven sus patentes de Magistrado, los que se entren con la toga reservada á la verdadera magistratura, y mientras prevalezca la ejecutoria que con un levantado espíritu de justificación pronunció la Corte Suprema de Justicia en el amparo solicitado contra esos mismos cinco diputados, por los CC. Bolio, Baqueiro y Alberto Hernandez, á quienes quicieron encausar, el infrascrito, no ya por sus propias opiniones, bien falibles por cierto, sino por el respeto que se merece aquel fallo ilustradísimo del primer tribunal de la Nación, en que procura inspirarse el Fiscal á despecho de los que se sientan lastimados en sus intereses materiales, por su honor y justa reivindicación de la Soberanía de este Estado, alzaré la voz de su ministerio toda la vez que sea obligado á ello, en casos como el presente, para repetir: que no siendo autoridades, en principio, los que fungen de magistrados, no pueden ser competentes para dejar de violar con sus actos, la garantía que sanciona el art. 16 de la Constitución de la República. Y porque el infrascrito conoce y respeta también la del Estado, es precisamente por lo que pide en este sentido, pues haciéndolo en otro contrario, es decir, consintiendo en el predominio objetado de las falsas autoridades, consentirá en la mas infame burla que hacerse puede, no solo de ese Código local, sino también de todas las instituciones que forman nuestro sistema popular representativo. Una de sus mas bellas y recientes conquistas, es la de estos juicios de amparo en que poder independiente y regulador, como es el judicial de la federación, venga á ser el que verifique las garantías que conforme al Pacto federal están

concedidas á los individuos, á los Estados contra las extralimitaciones de la autoridad federal, y á esta misma contra las invaciones de las autoridades de aquellos. Pero quedaran reducidos á una vana utopía ó á una simple teoría los principios que establecen el modo de hacer efectivas estas garantías, si los afortunados y audaces asaltantes de los puestos públicos, escudados con la ilegalidad misma de sus propios títulos, quisiesen alejar de su exámen imprescindible á la Justicia encargada de reconocerlos, bajo el pretexto de que con semejante acto se invade la Soberanía del Estado. No; ellos no son, no pueden ser la personificación de la soberanía, y ni siquiera osarán remedar aquel célebre dicho de un soberbio monarca frances, "el Estado soy yo".

El Fiscal no está exento de errores ni pasiones, y agradece, por lo mismo, los sanos consejos que para ponerse al abrigo de sus malas influencias, le dá el juicioso informante; pero ojalá que obrase conforme á sus recomendaciones moralizadoras, si quiera sea para que no se realice en su estimable persona, lo que sucede con otros apóstoles de las buenas doctrinas, que ven las cosas mejores, las aprueban ó aconsejan y siguen las peores.

Protesta el Fiscal, sin embargo, que cualquiera que sea el imperio que sus pasiones de hombre ejerzan sobre su conciencia fiscal, procura estar siempre dentro de los límites de lo justo que su deber le trasa, para mantenerse á la altura de su ministerio; deber que le es tanto mas fácil cumplir, cuanto que ningun interes tiene en que estos ciudadanos, mas bien que nosotros, compongan el Tribunal Superior de Justicia del Estado; su interes único como Fiscal y aun como individuo privado, es el interes de la sociedad á cuya defensa acude, y al de la ley en cuyo nombre habla; y ese interes, el de que los ciudadanos que lo solicitan sean amparados contra los actos de las falsas autoridades, que son precisamente contra

quienes mas se patentiza la procedencia de esta clase de recursos.

Así es que, en virtud de lo espuesto, y con fundamento de los arts. 16, 101 y 102 de la Constitución federal, y 1ª fracción 1ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el Fiscal pide á V. sentencie definitivamente este juicio, declarando que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Manuel Castillo Manzanilla, contra el acto de los que, titulándose falsamente magistrados del Tribunal Superior de Justicia de este Estado, le han impuesto una multa por infracción que se dice hecha, de la ley sobre papel sellado.

Mérida, Junio 2 de 1874.—*P. Higueros.*

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatán. Mérida, Julio 25 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Manuel Castillo Manzanilla, contra los CC. que funcionan como Tribunal Superior de Justicia del Estado, por haberle impuesto una multa por infracción de la ley de papel sellado de 14 de Febrero de 1856, con cuyo hecho alega que han violado en su persona la garantía que otorga el art. 16 constitucional, por ser un tribunal ilegítimo. Vista la suspensión del acto reclamado; el informe del referido tribunal en cuanto á lo principal; el pedimento fiscal; la citación para sentencia, y lo demás que ver y tener presente convino.

Considerando: que conforme al art. 82 de la Constitución particular del Estado, los ministros del Tribunal Superior deben ser elegidos popular y directamente.

Considerando: que según el art. 83 del mismo Código político, el escrutinio de dichos ministros, debe practicarlo la Legislatura local.

Considerando: que los que funcionan como magistrados del Tribunal Superior, no han sido electos popularmente, porque por

decreto de 16 de Enero del corriente, la Legislatura mandó suspender las elecciones de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, que debían verificarse el día 20 del mismo mes.

Considerando: que el mismo 16 de Enero la Legislatura quedó dividida en dos fracciones; la una compuesta de cinco diputados, y la otra de nueve; la primera solo contando con el apoyo de la fuerza armada, continuó ocupando el salón de sesiones, y llamándose 5ª Legislatura constitucional del Estado.

Considerando: que esta fracción de cinco diputados, no ha podido legalmente instalarse ni funcionar como Legislatura, por carecer de los requisitos exigidos en el art. 29 de la Constitución particular, ni mucho menos expedir leyes, decretos, ni aun tomar acuerdo alguno, por prohibirlo el art. 43 de la misma Carta.

Considerando: que por lo mismo, no ha podido legalmente la repetida minoría, declarar á persona alguna investida de autoridad constitucional, siendo nula en rigorosa consecuencia la declaración que hizo en favor de los referidos ministros del Tribunal Superior, infringiendo con ella los arts. 16, 40 41 y 109, del Pacto federativo de la República.

Considerando: que aunque la autoridad competente á que se contrae el citado artículo 16 constitucional, se ha querido decir que no se refiere á la legitimidad de las autoridades, sino solo á la competencia de la autoridad judicial; esto no es cierto porque no lo expresa así, sino que habla de autoridad en términos generales, por cuya razón se debe entender que establece la competencia constitucional de las autoridades, siendo impropio aplicar á dicho artículo la teoría de competencia judicial, la cual se dirime y no es motivo de amparo.

Por estos legales fundamentos, y de conformidad con el parecer fiscal, fundado en los citados artículos constitucionales y en la fracción 1ª art. 1º de la ley orgánica de

amparo de 20 de Enero de 1869, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes, falla:

1º: La Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Manuel Castillo Manzanilla, contra los actos de los que fungiendo como Tribunal Superior de Justicia del Estado, le han impuesto una multa con infraccion del art. 16 constitucional.

2º: Sáquese testimonio de este fallo para publicar, y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia Nacional, en revision, como previenen los arts. 13 y 27 de dicha ley orgánica.

Hágase saber.—*L. Manzanilla.* Ante mí,—*José Anacleto Castillo.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Agosto 17 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan por el C. Manuel Castillo Manzanilla, contra los CC. que fungon de Magistrados del Tribunal Superior de dicho Estado, á pesar de no tener investidura legal, por lo que, en concepto del quejoso, al imponerle la multa de veinticinco pesos por haber infringido una disposicion de la ley del papel sellado, han violado el art. 16 de la Constitucion federal. Visto el informe de la autoridad responsable; el pedimento fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: Que las personas que desempeñan, en el Estado de Yucatan, la magistratura del Superior Tribunal de Justicia, han sido declarados magistrados por la minoría de la Legislatura constitucional de dicho Estado, sin facultad alguna legal.

Que teniendo este vicio de origen el nombramiento de dichas personas, no se les puede considerar como tales magistrados.

Que en consecuencia, no han podido dictar con este carácter providencia alguna, siendo de toda evidencia que la que ha mo-

tivado el presente recurso como emanada de autoridad incompetente, viola el artículo 16 de la Constitucion federal.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la misma, se declara: que es de confirmarse y se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que ampara al quejoso.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toen.

Así lo decretaron por mayoría de votos, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Iglesias.*—*Auza.*—*García.*—*Lozano.*—*Arteaga.*—*Ramírez.*—*Altamirano.*—*Guzmán.*—*Zavala.*—*García.*—*Velasquez.*—*Lic. Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia. México, Agosto 21 de 1874.—*E. Landa.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por el C. Luciano P. Hernandez, contra la providencia del Gefe político de Guadalupe, que sin forma alguna de juicio lo desterró de los límites del municipio de Arista, como perturbador, sedicioso y pernicioso.*

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor dice: que Luciano P. Hernandez; vecino de la Villa de Arista, solicita amparo de la Justicia de la Union, contra la disposicion del Gefe político de Guadalupe, Francisco de Araujo, que ordenó á la de aquel lugar lo hiciera salir desterrado fuera de la municipalidad, y aún